

EDITORIAL / PORTADA

Fundamentalistas y cavernarios

El Ciudadano · 30 de septiembre de 2016

No es posible que un grupo de fanáticos conservadores imponga sus visiones y modos de vida a la gran mayoría de la población.





Las elites buscan a través de su poder ubicuo el control absoluto de sus subalternos. Una tendencia que cruza toda la historia marcada por un rígido autoritarismo que se expresa con bríos renovados en el presente. Las elites, con un dominio cerrado en áreas como la economía y la política, extienden su autoridad a espacios subjetivos como las conciencias. El control de las subjetividades, mecanismo necesario para mantener la sujeción de las masas subalternas, aun cuando enfrentado a los avances emancipatorios y rebeldes del siglo pasado, fue recuperado y reforzado durante la dictadura para volver a diluirse a partir de la transición. Desde entonces, aquellas materias que los conservadores denominan “valóricas”, enfrentan, desde la rigidez más tradicionalista atada por la dictadura un proceso de liberación como efecto de la recuperación de derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.

En estos años, aun cuando las elites no han descuidado el control absoluto del orden económico y político, obteniendo niveles de concentración del poder que no tienen parangón por lo menos en los últimos cien años, han perdido terreno en las costumbres y comportamiento de la ciudadanía, que ha ido ganando espacios de libertad y respeto al hacer valer sus derechos de género, sexualidad o relaciones diversas de pareja. Una serie de leyes e importantes avances ha logrado la sociedad civil organizada durante los años de la postdictadura, los que tuvieron sus puntos

de partida con la aprobación de la ley de divorcio y la legislación que puso fin a la discriminación entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Todos estos avances pudieron realizarse pese a la férrea oposición de las Iglesias Católica y Evangélica y de los sectores más retrógrados, pero no por ello poderosos, de la sociedad chilena.

Durante las últimas semanas el país vuelve a enfrentarse a una nueva arremetida de los grupos más fundamentalistas y cavernarios de nuestra sociedad. Aquellos mismos grupos que se han opuesto con tenacidad a la educación sexual en los colegios, al uso y distribución del condón como medida de prevención para el VIH o al matrimonio homosexual, pese a tener entre sus filas y entre sus líderes a demostrados pedófilos, como los casos de los curas Fernando Karadima y John O'Reilly, ahora impugnan con pasión el proyecto de ley de aborto en tres causales y acusan con la inquisición y el fuego del infierno a los senadores que lo voten favorablemente.

Mientras más avanza la demanda por libertades de la sociedad civil, los sectores más retrógrados ejercen presiones proporcionales en el sentido contrario, generando una enorme contradicción que tensiona a la sociedad chilena. Por un lado organizaciones y grandes masas que reivindican modos de vida libres de ataduras religiosas y sectarias, en tanto en sentido inverso una elite pequeña y fundamentalista pero creciente en poder intenta ejercer un control sobre las conciencias a modo de control social.

Estos grupos, vinculados con poderes políticos y económicos, aun cuando carentes de organización real y apoyo efectivo de la sociedad civil, han desarrollado una inédita campaña de lobby y de presión desde la opacidad hacia el poder político a través de grandes y periódicas inserciones en la prensa, así como algunas acciones en el barrio cívico con muy baja convocatoria pero amplia difusión por los diarios del duopolio.

Las presiones de estos sectores son equivalentes en su desproporción y despropósitos a todos los desequilibrios y distorsiones que existen en otras áreas públicas y privadas, las que son una derivación de la extrema concentración del poder, de la falta de verdaderos representantes políticos y de una real democratización de las instituciones. En este escenario sesgado, discontinuo y desigual, un puñado de fundamentalistas pechoños tienen tanto poder de influencia como millones de personas, por lo que asistimos a una situación de extrema gravedad y preocupación que podría perpetuar una condición impuesta por la dictadura de claros tintes autoritarios y sectarios.

No es posible que un grupo de fanáticos conservadores imponga sus visiones y modos de vida a la gran mayoría de la población. En este sentido, es absolutamente necesario que la sociedad civil organizada impugne esa condición coercitiva aplicada por la dictadura y mantenida desde entonces por los gobiernos de la transición. Es necesario empujar por los derechos y libertades individuales y denunciar a quienes buscan imponer en los otros sus cerradas creencias.

Fuente: [El Ciudadano](#)